

en su momento para sostener que el tercer acto de *La venganza de Tamar* es obra de Calderón, que luego lo retoma como segundo acto de *Los cabellos de Absalón*. Pensaba entonces que la atribución de los dos primeros actos a Tirso era fiable, frente a la alternativa de Godínez, a quien se le atribuye la obra en una *suelta* sevillana de Leefdael y sostuve que era colaboración entre Tirso y Calderón. Pero luego comprobé que no hay nada solvente que relacione la obra con Tirso, y que, en cambio, sí hay al menos un documento que relaciona *La venganza de Tamar* con Claramonte: el repertorio de Juan Jerónimo Almella en 1628. La hipótesis de un texto de colaboración entre Claramonte, Godínez o Vélez de Guevara, y Calderón para el tercer acto me parece mucho más sólida que cualquier otra. Esto hace entrar el tema de las obras en colaboración típicas del decenio 1620-1630 en el panorama general de las atribuciones dudosas. Y hay que tener en cuenta que aquí van a entrar obras en las que Tirso no está implicado, pero sí autores como Rojas Zorrilla. *Del rey abajo ninguno* está editada tanto a nombre de Rojas Zorrilla como de Calderón y ambos colaboraron en obras de tres autores con Vélez, Belmonte, Mira de Amescua, Coello o Montalbán.

J. M. L.: Con todo esto, lo que tenemos es una revisión en profundidad del teatro del Siglo de Oro, con muchos más matices que la división escolar entre Ciclo de Lope y Ciclo de Calderón, con un Tirso de por medio como supuesto creador del mito europeo de Don Juan.

A. R. L.: Eso es lo que pasa. Y creo que esa revisión es muy necesaria, entre otras cosas, para valorar como es debido la obra de Tirso, que anda muy azacaneada desde las incursiones de Cotarelo y Blanca de los Ríos, y el fervor mercedario que desea con entusiasmo atribuir obras de fama, aunque esto vaya en contra de lo que sabemos en materia de investigación.

J. M. L.: Muchas gracias por tus desvelos, y tu magisterio.

Alfredo Rodríguez López-Vázquez es catedrático de Didáctica de Literatura y Pedagogía Teatral en la Universidad de La Coruña. Correo electrónico: ALROLOVA@terra.es.

José Manuel López de Abiada es catedrático de Literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Berna. Correo electrónico: jose-manuel.lopez@rom.unibe.ch.

Vicente Palermo y María Lavega

Papeleras: las castañas siguen en el fuego

Introducción

La disputa entre la Argentina y el Uruguay por las “papeleras” comenzó cuando un grupo de vecinos de la ciudad argentina de Gualaguaychú cortó el puente que une esa localidad con la vecina uruguaya de Fray Bentos, bloqueando así una ruta internacional. El argumento de los assembleístas entrerrianos consistió en que las dos plantas celulósicas proyectadas deteriorarían catastróficamente el medio ambiente. La bandera fue asumida por el gobierno argentino y el conflicto, que incluyó una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, hizo que una de las empresas, ENCE, anunciara su decisión de relocalizar su planta, mientras que la otra, Botnia, con pleno respaldo del gobierno uruguayo, continúa en construcción. Los bloqueos, cortes de rutas y movilizaciones persisten.

1. En mayo de 2007, el conflicto argentino-uruguayo lleva la impronta de los acontecimientos recientes:

* Delegaciones de Argentina y Uruguay firmaron un documento conjunto en Madrid, fruto de la tarea del “facilitador” español, donde se fijó un temario a trabajar de cuatro puntos: la localización de la planta de la empresa Botnia, los cortes de ruta en Entre Ríos (o sea, las principales cuestiones del diferendo), la aplicación del Estatuto del Río Uruguay (como garantía de los compromisos que eventualmente asuma Uruguay) y la protección ambiental conjunta de dicho río (en respuesta a una oferta uruguaya para crear un sistema de protección ambiental recíproco).

Sin embargo, para algunos sectores políticos y diplomáticos argentinos, la iniciativa de renegociar el Estatuto del Río Uruguay supone “entreguismo” y una actitud abiertamente contradictoria con uno de los elementos centrales de la posición oficial en la controversia: la imputación a Uruguay de violación reiterada del tratado. Al mismo tiempo, el gobierno argentino acusa a Vázquez de mantener una “diplomacia de sordo”, al rechazar rotundamente la exigencia argentina de relocalización y al negarse a negociar hasta que no se levanten definitivamente los cortes de ruta. Con todo, se anuncia un “optimismo moderado” y la satisfacción por el retorno de un diálogo que, según prometen las partes, será sincero, prudente y abierto y se extenderá hasta llegar a un acuerdo. Quizás la novedad más significativa, y sólo precariamente prometedor, sea un movimiento convergente, desde la rigidez hacia la ambigüedad, de ambas partes: el gobierno uruguayo se niega a negociar mientras continúen los cortes pero admite dialogar; el gobierno argentino ha emitido señales que podrían ser interpretadas como asumiendo la localización de la pastera de Botnia como hecho consumado (para gran indignación de los vecinalistas). Pero no hay la menor evidencia a favor de que la “facilitación”

española por sí sola pueda desmontar el conflicto.

* Extraoficialmente, existe una hipótesis de solución: desde España apuestan a la posibilidad de conformar una “zona ejemplar de protección ambiental” alrededor de la fábrica de Botnia. Se trataría de una zona, no de soberanía compartida, pero sí de responsabilidad conjunta en la preservación del medio ambiente. No pasa por el momento de una especulación carente de sustento político.

* El “Abrazo al río” organizado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocó el 29-04-2007 a 80.000 personas (según cálculos de la Gendarmería argentina) o 130.000 (según los vecinalistas) que, por tercer año consecutivo, renovaron su rechazo a la instalación de la pastera. Los vecinos mantienen su postura de que la planta sea relocalizada; recién entonces aceptarían levantar los cortes de ruta. La Casa Rosada aspira a que el conflicto social en esta provincia ceda y se depongan los bloqueos, pero se abstiene de cualquier medida coercitiva al respecto.

* La localización de la pastera de Botnia parece, en efecto, irreversible; comenzaría a producir pasta celulosa en septiembre y ello podría suscitar un recrudecimiento del clima de lucha de los asambleístas. De hecho, algunos de ellos ya han amenazando con cruzar la frontera y “derribar la fábrica de Botnia a martillazos”.

* En verdad, la escalada de las medidas de fuerza y otras acciones públicas de los vecinalistas entrerrianos ha continuado, así como se ha intensificado el sentimiento nacional defensivo entre los uruguayos.

2. Los principales daños potenciales residen en los peligros de largo plazo: desaprovechamiento definitivo de las ganancias de escala que acarrearía la coo-

peración ambiental, económica y comercial en el sector productivo forestal-papelero; creación de un diferendo político-diplomático crónico que afecte por muchos años las relaciones argentino-uruguayas, así marcadas por la mutua desconfianza; incidencia del conflicto en un eventual proceso de disgregación del Mercosur (poniendo de manifiesto las debilidades y los vacíos institucionales del bloque). Y el peor de todos: que por primera vez un conflicto entre uruguayos y argentinos adquiriera encarnadura social y cultural, convertido en una *causa nacional* que intoxique jóvenes generaciones y proporcione alimentos nuevos a los sempiternos nacionalismos.

Pese a nuestro escepticismo, vale la pena imaginar la transformación del conflicto en un escenario óptimo en el corto plazo. El propósito del ejercicio es, precisamente, identificar más claramente las *brechas de viabilidad* que puede presentar una propuesta constructiva y explícitamente comprometida con ciertos valores, como punto de partida realista de una búsqueda de soluciones.

Metodológicamente, la mejor forma de identificar brechas de viabilidad es *imaginar el escenario deseable y analizar hacia atrás los pasos indispensables para llegar al mismo*. Al tratarse de una tarea compleja que involucra muchos actores y muy diversos recursos (entre ellos el tiempo), el análisis *hipotético-retroactivo* es lo más adecuado.

3. Un resultado “óptimo” *no puede expresarse en términos de suma cero*: debe conllevar logros para ambos países. Si, por el contrario, el conflicto evoluciona hacia un esquema de ganador-perdedor absolutos, muchos de los peligros potenciales, quizás todos, se realizarán. Un resultado óptimo podría estar constituido por los siguientes componentes:

* Argentina asume que, a la luz de todas las informaciones serias a la mano, puede confiar en que las plantas de Botnia y ENCE operarán con las mejores tecnologías disponibles en términos medioambientales.

* Argentina y Uruguay asumen conjuntamente que la validez de lo anterior descansa en activos controles sobre la construcción y la operación permanente de las plantas; se institucionaliza un monitoreo conjunto.

* Argentina y Uruguay enderezan una iniciativa conjunta, en el ámbito del Mercosur, para encarar la cuestión de la sostenibilidad productiva y ambiental.

* Ambos gobiernos, invitando al resto de los países del Mercosur *de la región* (Brasil, Paraguay), convocan a los sectores empresariales forestales y papejeros, sea locales, sea extraregionales con disposición inversora, a fijar políticas que permitan el desenvolvimiento de un *cluster* que maximice las ganancias de escala, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones, y minimice los efectos ambientales negativos.

* Uruguay, y/o la empresa Botnia, asumen el costo económico de la creación de la “intervención paisajística a gran escala”, barrera verde que eliminaría la visibilidad de la planta de Fray Bentos. Debe reconocerse que es justo que los vecinos de Gualaguaychú se preocupen por la estética de la zona.

* Uruguay absorbe los costos económicos y sociales consumados por los ilegales bloqueos de rutas y puentes internacionales del activismo vecinal argentino. Pero Argentina asume explícitamente que Uruguay ha absorbido esos costos.

* Las fuerzas vecinales activas en la provincia de Entre Ríos levantan definitivamente todas las medidas de fuerza. Se discute, asimismo, la creación de instancias de participación de vecinos de ambas

márgenes del Uruguay, en los mecanismos institucionales de control y en las políticas de regulación de las actividades forestales y papeleras en el seno del Mercosur.

* El gobierno argentino retira la demanda en La Haya contra Uruguay por la hipotética violación oriental del Estatuto del Río Uruguay.

4. El “sueño” de ese escenario óptimo sirve para poner de manifiesto cuáles son los obstáculos que se interponen entre él, y el actual y muy deplorable estado de cosas. Y qué podría hacerse para conferirle mayor viabilidad. Para eso, es conveniente examinar en algún detalle la situación y las opciones al alcance de los principales actores involucrados.

Los asambleístas entrerrianos. Están en un auténtico callejón sin salida. Se metieron en él en parte por su propia responsabilidad y en parte por la irresponsabilidad de los gobiernos local, provincial y nacional argentinos, que respaldaron, alentaron y proporcionaron apoyo logístico a la metodología *neopiquetera*. Fueran cuales fueren los intereses, las percepciones, las valoraciones, que inicialmente dispararon el intenso activismo vecinal, éste, con el paso del tiempo, ha cristalizado en términos tan fuertemente identitarios, que los activistas no tienen cómo “retroceder” hacia posiciones más razonables. Cada paso que dan escalando y radicalizando sus acciones los lleva a perder aprobación social; y están sometidos a un inevitable desgaste.

El gobierno nacional argentino. El presidente Kirchner está delate de un escenario electoral de crucial importancia para este mismo año. ¿Porqué arriesgarse tomando iniciativas que irriten a los vecinalistas, o den pie a la picante acusación de que el gobierno no defiende el *interés nacional*? Nada importante ocurrirá hasta después de las elecciones. Con todo, el verdadero obs-

táculo no está constituido por la proximidad de las elecciones, *sino por las percepciones políticas del presidente en torno a los posibles costos y beneficios electorales de las distintas opciones a su disposición.* El cálculo está condicionado por el hecho de que los beneficios difusos (aun cuando sean cuantitativamente mayores) pueden ser cualitativamente menos importantes, para él, que los costos concentrados. Junto a las elecciones presidenciales, se renuevan los tres senadores nacionales entrerrianos, y la estructura federal del régimen político argentino tiende a ponderar muy particularmente las preferencias locales. Y el escenario partidario entrerriano es un auténtico campo minado; nada puede esperarse de positivo en el corto plazo, ni siquiera en términos especulativos, de los partidos provinciales (el radicalismo, por caso, tomó la iniciativa del absurdo proyecto de ley de prohibición de exportar maderas), y menos aún del propio gobierno provincial. Es más que probable que Kirchner prefiera, especialmente si la perspectiva electoral nacional para el oficialismo se mantiene favorable, evitar el riesgo de costos concentrados, sacrificando beneficios difusos. Pero hay dos motivos por los que, a lo largo del año, esto podría cambiar: un manifiesto deterioro de la imagen de los vecinalistas ante la opinión pública provincial y nacional, y una fluctuación más importante y activa de la opinión pública nacional. Antes de examinar la opinión pública ocupémonos sucintamente de otro actor nacional, la *burocracia diplomática*.

Hasta abril de 2005 (cuando estalló la movilización vecinal y los gobiernos provincial y nacional adoptaron las consignas y pasaron a la línea dura de denuncia y presión contra las “papeleras”) lo que había estado haciendo el personal diplomático abocado al tema era muy sensato: se estaba configurando una solución de compromiso, sobre una base informal, con

el gobierno uruguayo, que haría posible la instalación de las plantas y el desenvolvimiento de controles y monitoreos apropiados. Sin embargo, estas negociaciones carecían de un adecuado acompañamiento político doméstico (innecesario del lado uruguayo pero imprescindible del argentino, donde los vecinalistas observaban con creciente desconfianza). Cuando la protesta vecinal alcanzó repercusión nacional y los gobiernos provincial y nacional argentino alteraron drásticamente el rumbo, el personal diplomático reincidió en los tics tradicionales de una burocracia históricamente acusada –sin el menor fundamento– de *perder en la mesa de negociaciones lo que las armas argentinas supieron ganar en los campos de batalla*. Así, la diplomacia argentina se siente en la necesidad de sobrereactuar su nacionalismo.

La opinión pública argentina. No faltaron en este conflicto quienes (el presidente, los sucesivos cancilleres, la secretaria de Medio Ambiente, ministros, el gobernador provincial, los vecinalistas, dirigentes sindicales, etc.) hicieran lo imposible para convertirlo en una *causa nacional*. Afortunadamente, *no lo han logrado*. El fracaso del nacionalismo papelero se debe, en parte, a razones estructurales: la inocultable diversidad de intereses domésticos en juego (desde quienes consideran prioritario evitar que encalle el resentimiento recíproco entre argentinos y uruguayos, pasando por quienes velan por el fragilizado Mercosur, por aquellos que estiman estos comportamientos como una pésima señal para los inversores, hasta los defensores, que no carecen de buenas razones, de una política productiva forestal y papelera sustentable). Pero se debe también a razones culturales: en la Argentina es cada vez más difícil *malvinizar* los conflictos externos, y la propia vigencia de la *causa Malvinas* está latentemente en cuestión (se discute el tema en: *Sal en las heridas. Las Malvinas en la cul-*

tura argentina contemporánea; Vicente Palermo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007). Ya no vivimos en el mundo del *estado-nación*, cuando era *relativamente* fácil configurar un interés o un agregado de ellos, como *interés nacional*. Hoy día eso es mucho más difícil, porque los intereses, así como las identidades, *en el seno* de cada estado y *en cada* sociedad nacional, se han complejizado, diversificado, cruzado y articulado de numerosas formas, gran parte de ellas transnacionales, que elevan notoriamente los costos políticos (y de todo tipo) de las operaciones de configuración de *interés nacional*. Éste no es un problema específicamente argentino, como tampoco lo es que, como casi siempre, la política profesional tarde en acusar recibo de los cambios. La gran paradoja (tampoco peculiar a la Argentina) es que si el grueso de la “clase política” está en la retaguardia de los grandes procesos de cambio, *no es sino del mundo de la propia política de donde pueden surgir los liderazgos* requeridos para acelerar y conducir la adaptación. Una sinergia entre una opinión pública más activa y liderazgos políticos más osados es una condición necesaria –aunque no suficiente– para que los argentinos hagamos nuestra parte en la solución del intríngulis en que, junto a nuestros hermanos uruguayos, nos hemos metido.

El gobierno nacional uruguayo. A diferencia del presidente argentino, el jefe del Ejecutivo oriental dispone en este conflicto de escasos grados de libertad. Por un lado, enfrentó, a cada señal conciliadora emitida hacia el gobierno argentino, el fuego cerrado de toda la oposición debido a que los partidos Blanco y Colorado fueron los que, a lo largo de sucesivos gobiernos desde los 80, sentaron las bases de una política forestal de largo plazo, con estímulos fiscales, uno de cuyos eslabones enteramente lógicos es la producción de celulosa. El Frente Amplio, por su vez, si bien tuvo un com-

portamiento matizado, en sus años de oposición, sobre la política forestal (votando contra algunos proyectos y a favor de otros), fue tomando distancia de los críticos más duros a dicha política y a la instalación de plantas celulósicas, *pari passu* con su camino al gobierno. No es cierto que Tabaré haya asumido encendidas posiciones críticas durante su campaña electoral. Por otra parte, el marco legal establecido como encuadre para estas extremadamente importantes inversiones externas, impone restricciones prácticamente insalvables a la interferencia arbitraria del gobierno sobre las empresas. Todo ello en un entorno político-cultural que, en fuerte contraste con el argentino, es el de las tradiciones uruguayas de apego a las instituciones y sujeción a la ley. El fuerte institucionalismo de la cultura política uruguaya ha marcado significativamente muchos de los momentos críticos de la historia política oriental.

La opinión pública uruguaya. Cabe enfatizar la relevancia *proporcional* de los emprendimientos en una economía pequeña y estancada como la uruguaya, ya que estos factores incidieron en la fluctuación de las preferencias domésticas, y fueron morigerando el efecto de las objeciones de cuño ideológico (contra la penetración del capital extranjero) y ecológico (por los hipotéticos impactos medioambientales del “modelo forestal”). Frente a los cortes de ruta de los vecinalistas entrerrianos y luego a los comportamientos intimidatorios de las autoridades argentinas, los uruguayos cerraron filas (con pocas excepciones) y, lamentablemente, el conflicto ha ido adquiriendo raíces sociales y culturales con fuerte impronta identitaria, camino de constituirse en una auténtica *causa nacional*.

5. No tiene sentido esperar que el conflicto, dada la magnitud evidente de los obstáculos que se presentan para alcanzar una solución razonable, se apa-

gue solo. Ese escenario de pasividad no solamente privará a uruguayos y argentinos del mejor aprovechamiento posible de las potencialidades productivas y ambientales (dando paso a una pugna “a la baja” con regulaciones de peor calidad, menores o menos convenientes inversiones, mayores peligros de deterioro ambiental) sino que también será incapaz de evitar lo peor, la acumulación de resentimientos y agravios recíprocos precisamente cuando más necesitamos profundizar la hermandad, la confianza mutua y la integración.

Así las cosas, la reversión de este espiral negativo radica hoy por hoy en mayor medida en lo que podamos hacer los propios argentinos. Pero, para satisfacer la condición de que el resultado no sea un juego de suma cero, los uruguayos tampoco la tienen fácil, y ardua será la tarea de viabilizar algunas de sus concesiones. Las castañas siguen en el fuego; sería bueno disponerse a sacarlas porque a diferencia de otras ocasiones clarísimas (Malvinas, 1982), ningún facilitador lo hará por nosotros.

Vicente Palermo, investigador independiente del Conicet, Argentina, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (vicentepalermo@gmail.com).

María Lavega, carrera de Ciencias Políticas, Universidad de Buenos Aires (ma_lavega@yahoo.com.ar).

Nélida Archenti y María Inés Tula

Los límites institucionales de las cuotas de género en América Latina

Las normas que establecen cuotas para mujeres en las listas partidarias de candi-